

TIPO DE JUICIO: NULIDAD.

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/JDN-213/2025.

PARTE ACTORA:

[REDACTED]

AUTORIDAD DEMANDADA: CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO.

SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN: FERNANDA MARYLE ALONSO MARTÍNEZ.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: ANA MARÍA ROMERO CAJIGAL.

Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil veintiséis.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Sentencia que emite el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en los autos del expediente

TJA/5ªSERA/JDN-213/2025, en la que se declararon **inoperantes e infundadas** las razones de impugnación hechas valer por [REDACTED] [REDACTED], en contra de la resolución de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], emitida por el **H. Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos**, mediante la cual se le sancionó a la actora con **suspensión temporal de sus funciones sin goce de sueldo por treinta días**; confirmando la **legalidad** del acto impugnado; con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:

[REDACTED]

Autoridad demandada: Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Actos impugnados: *"La resolución emitida por la responsable dentro de expediente [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]..." (Sic)*

LJUSTICIAADMVAEMO: *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos¹.*

¹ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/JDN-213/2025

LORGTJAEMO: *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos².*

LSSPEM: *Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos*

LOFISCALIAEM: *Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.*

CPROCIVILEM: *Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO:

1. Previo a subsanar la prevención de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinticinco; con fecha **tres de octubre de mismo año**, se tuvo compareciendo a la **parte actora** por su propio derecho ante este **Tribunal** promoviendo Juicio de Nulidad en contra del acto de la **autoridad demandada** precisada en su escrito de demanda inicial.

² Idem

2. Con las copias simples de la misma, se ordenó emplazar a la **autoridad demandada** para que dentro del término de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra.

Por cuanto, a la **suspensión** solicitada, la misma se negó.

3. Emplazada que fue la **autoridad demandada**, por auto del **seis de noviembre de dos mil veinticinco**, se tuvo a la **autoridad demandada** dando contestación a la demanda incoada en su contra, ordenándose con la misma dar vista a la **parte actora** por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, además se le hizo del conocimiento el derecho que tenía para ampliar su demanda en un término de quince días.

4. En diversos acuerdos del **doce de diciembre de dos mil veinticinco**, se le tuvo a la **parte actora** por perdido su derecho para desahogar la vista respecto de la contestación de demanda.

5. Por proveído de fecha **diecinueve de enero de dos mil veintiséis**, se tuvo por fenecido el derecho de la accionante para realizar la ampliación de la misma, ordenándose abrir el periodo probatorio por un plazo de cinco días común para ambas partes.

6. Mediante acuerdo del **trece de febrero del dos mil veintiséis**, se declaró por precluido el derecho de las partes

para ofrecer pruebas y para mejor proveer se admitieron las documentales que fueron exhibidas en autos por las partes en términos del artículo 53 del **CPROCIVILEM**.

7. Es así que el **doce de marzo de dos mil veintiséis**, tuvo verificativo la audiencia de ley, en donde se desahogaron las pruebas admitidas en autos, teniendo precluido el derecho de las partes para formular alegatos; consecuentemente una vez cerrada la etapa de instrucción, se citó a las partes para oír sentencia, misma que se emite al tenor de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

Este **Tribunal** es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II sub inciso a), I) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**.

Porque como se advierte del **acto impugnado** se trata de un juicio de nulidad promovido por un miembro de una Institución de Seguridad Pública, quien ostenta el cargo de [REDACTED] adscrita al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

5. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

La existencia jurídica del acto impugnado materia de esta controversia quedó acreditada en autos, con la exhibición de las copias certificadas de resolución de fecha **once de agosto de dos mil veinticinco**³, derivada del procedimiento de responsabilidad administrativa número [REDACTED], instruido en contra de [REDACTED], en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Documental exhibida en copias certificadas que al no haber sido objeto de impugnación en los términos establecidos en el artículo 59⁴ y 60⁵ de la **LJUSTICIAADMVAEMO**; y en lo

³ Cuadernillo de datos personales a foja 822 a la 842.

⁴ **Artículo 59.** Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos.

⁵ **Artículo 60.** Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:

- I. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;
- II. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con la misma;
- III. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda; al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;
- IV. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto probatorio alguno;
- V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de este Artículo, las Salas citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;
- VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;
- VII. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la lógica y la experiencia, y
- VIII. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes. La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

dispuesto por el artículo 491⁶ del **CPROCIVILEM**, aplicable supletoriamente a la ley antes mencionada de conformidad a su numeral 7⁷. Por lo tanto, se les confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 437 primer párrafo⁸ del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADMVAEMO**.

6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último⁹ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en

⁶ **ARTICULO 491.-** Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde.

⁷ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

⁸ **ARTICULO 437.-** Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.

⁹ **Artículo 37.** El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio respectivo.

términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.¹⁰

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Es menester señalar que, si bien los artículos 17 *Constitucional*, 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la *Convención Americana sobre Derecho Humanos*, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de

¹⁰ Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

nulidad sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la cuestión debatida.

Las causales de improcedencia establecidas en la **LJUSTICIAADMVAEMO** tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulen, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo.

En el presente asunto, la demandada no hizo valer causal de improcedencia alguna.

Una vez analizado el presente asunto para verificar si se actualiza una causal de improcedencia, se concluye que del presente juicio no se desprende ninguna sobre la cual este **Tribunal** deba pronunciarse; en ese tenor, es procedente el análisis del fondo de la cuestión planteada.

7. ESTUDIO DE FONDO.

7.1 Planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86¹¹ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, se procede a hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente juicio.

De acuerdo a lo planteado por las partes tanto en la demanda y la contestación, así como las pruebas aportadas; la litis consiste en determinar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado a la luz de las razones de impugnación esgrimidas por la demandante y que consiste en:

"La resolución emitida por la responsable dentro de expediente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]..." (Sic)

Así como la procedencia o improcedencia de la pretensión reclamada.

7.1 Presunción de legalidad

En el Estado de Morelos, los actos de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de los Ayuntamientos o de los Organismos Descentralizados Estatales o Municipales, gozan de presunción de legalidad, en términos de lo que

¹¹ **Artículo 86.** Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener:

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

11. ...

disponen los artículos 8¹² de la *Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos*.

Por lo anterior, la carga de la prueba corresponde a la **parte actora**. Esto vinculado con el primer párrafo del artículo 386¹³ del **CPROCIVILEM** que señala, que la parte que afirme tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga una presunción legal, norma aplicable de manera complementaria en términos del artículo 7¹⁴ de la **LJUSTICIAADMVAEMO** y con apoyo en el siguiente criterio jurisprudencial:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.¹⁵

Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial,

¹² **ARTÍCULO 8.** - El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.

¹³ **ARTICULO 386.-** Carga de la prueba. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. **Así, la parte que afirme tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal.**

En casos de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, ésta se rendirá por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla; o, si esto no pudiere determinarse por el Juez, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.

¹⁴ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. **A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;** en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

¹⁵ Época: Novena Época; Registro: 1003712; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento; Materia(s): Común; Tesis: 1833; Página: 2080.

en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.

(El énfasis es de este Tribunal)

7.2 Pruebas

Ninguna de las partes ofreció ni ratificó sus pruebas; sin embargo, para mejor proveer se admitieron las que obran en autos, siendo las siguientes:

1. **LA DOCUMENTAL.** - Consistente en Notificación a través de sello de fecha **tres de septiembre de dos mil veinticinco**, donde se notificó la resolución dictada dentro del expediente [REDACTED], misma que obra dentro de las copias certificadas¹⁶.

2. **LA DOCUMENTAL.** - Consistente en copia certificada de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dictada dentro del expediente [REDACTED]

¹⁶ Integradas en el anexo denominado "Cuadernillo de Datos Personales".

[REDACTED], misma que obra dentro de las copias certificadas.¹⁷

3. LA DOCUMENTAL. - Consistente en copias certificadas constantes de ochocientas setenta y tres fojas según su certificación corresponden al expediente administrativo [REDACTED] instaurado en contra de la **parte actora**.¹⁸

Documentales que se tienen por auténticas al no haber sido objeto de impugnación en los términos establecidos en el artículo 59¹⁹ y 60²⁰ de la **LJUSTICIAADMVAEM**; y en lo

¹⁷ Integradas en el anexo denominado "Cuadernillo de Datos Personales".

¹⁸ Integradas en el anexo denominado "Cuadernillo de Datos Personales".

¹⁹ **Artículo 59.** Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos.

²⁰ **Artículo 60.** Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:

- I. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;
 - II. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con la misma;
 - III. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda; al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;
 - IV. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto probatorio alguno;
 - V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de este Artículo, las Salas citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;
 - VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;
 - VII. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la lógica y la experiencia, y
 - VIII. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes.
- La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

dispuesto por el artículo 491²¹ del **CPROCIVILEM**, aplicable supletoriamente a la ley antes mencionada de conformidad a su numeral 7²², haciendo prueba plena.

7.3 Razones de impugnación

Las razones de impugnación esgrimidas por la **parte actora** en su demanda, aparecen visibles de la foja cinco a la quince, mismas que se tienen aquí como íntegramente reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias; sin que esto cause perjuicio o afecte su defensa, pues el hecho de no transcribirlas en el presente fallo no significa que este **Tribunal** esté imposibilitado para el estudio de las mismas, cuestión que no implica violación a precepto alguno de la **LJUSTICIAADMVAEMO**.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. ²³

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo

²¹ **ARTICULO 491.-** Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde.

²² **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

²³ **SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. JURISPRUDENCIA** de la Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599.

tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

La **parte actora** manifiesta substancialmente:

Primero. – Que, el acto que se combate es ilegal porque la autoridad demandada, violenta su garantía su garantía constitucional que confiere el artículo 14, ya que la responsable transgrede las garantías de seguridad jurídica y legalidad; pues en cumplimiento a esa garantía de audiencia deben respetarse forzosa y necesariamente las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que son necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación.

Agrega que el acto impugnado la condena a una suspensión temporal de sus funciones, sin goce de sueldo por treinta días, de ahí la violación al principio de congruencia externa, ocasionando la violación a sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados a su favor.

Segundo. - Señala que, se genera también perjuicio a la seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad demandada erróneamente motiva su acto, lo cual resulta violatorio a las normas esenciales del procedimiento y sin que dé cumplimiento a las formalidades ni que se hayan cumplido los requisitos de procedibilidad, en virtud de no observarse un estricto apego a la ley. Resalta que es indispensable que los

actos de autoridad cumplan con todos y cada uno de los requisitos constitucionales, ya que la falta de uno de ellos trae como consecuencia que todos los actos que deriven del mismo resulten inconstitucionales.

Tercero.- Sostiene que, la resolución que combate es carente de legalidad, de una debida fundamentación y motivación, contraviniendo lo que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales; de lo que se tiene que la autoridad demandada al momento de emitir la resolución impugnada se limitó a declarar lo manifestado en el considerando 7.1, sin valorar ni analizar los puntos que planteó al momento de dar contestación a los hechos que se le atribuyen, ni hace pronunciamiento alguno sobre las pruebas ofrecidas dentro del procedimiento administrativo seguido en su contra, como lo es el análisis de la carpeta de las copias cotejadas de la investigación [REDACTED], ya que con ella se acreditan sus defensas y excepciones hechas valer en el procedimiento de origen, incumpliendo con las garantías de debido proceso, al no realizar un análisis exhaustivo de los puntos que integraron la litis.

Por lo anterior considera que, en el acto impugnado no se cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, al no atender los motivos que hizo valer al dar contestación al procedimiento administrativo, ya que al resolver el fondo del mismo debió hacerlo sin omitir nada, lo que denota su ilegalidad.

7.4 Contestación de la demanda

La **autoridad demandada** contestó que, el **acto impugnado** es legalmente fundado y motivado y, atendiendo las razones de impugnación primero y segundo, son inoperantes para declarar la nulidad, en virtud de que lo expuesto por la actora resulta ambiguo y superficial ya que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, ya que se limita a afirmar de manera imprecisa que se trasgreden sus garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas por los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados de Unidos Mexicanos, sin precisar que formalidad es la que la actora considera se incumplió o en las que le fueron violentadas sus garantías.

Adiciona que tampoco especifica porque el acto impugnado se encuentra erróneamente motivado; es decir no logra construir ni proponer la causa de pedir, al omitir referirse al fundamento, razones decisorios o argumentos y el porqué de su reclamación. Revelando con ello una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas; por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por ello sus manifestaciones no podrán ser analizadas por el órgano jurisdiccional al ser inoperantes para obtener una declaración de invalidez.

Asegura que, le resolución emitida en el procedimiento [REDACTED], fue emitida de manera fundada y motivada, en virtud de que en la misma fue establecida la competencia del Órgano Colegiado para conocer y deliberar del asunto, fueron analizados los argumentos que en vía de

defensa fueron realizados por la accionante, con relación a los medios de prueba ofrecidos, así mismo, fueron expuestos los motivos por los cuales se tuvo acreditada la responsabilidad administrativa de la servidora pública y cuáles fueron las hipótesis legales que actualizó con dicha falta administrativa.

Así mismo, aseveró que el acto impugnado resultaba legal, en razón de que el mismo emana de un procedimiento disciplinario en el cual fueron respetadas las garantías de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y defensa ya que con fecha [REDACTED], se dio inicio a la investigación administrativa [REDACTED] determinándose por acuerdo de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 171, de la **LSSPEM**, dar formal inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la actora, turnándolo para su continuación a la Dirección de Control de la Visitaduría General y de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedando registrado bajo el número de procedimiento [REDACTED] ordenándose por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil veinticinco, realizar el emplazamiento a la servidora pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 171, de la **LSSPEM**, motivo por el cual, en fecha siete de mayo de dos mil veinticinco, fue citada la demandante de forma personal, a efecto de que compareciera el día catorce de ese mes y año, a las doce horas, ante las oficinas que ocupa Visitaduría General y de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de realizar el

emplazamiento en mención, como se advierte a fojas 529 y 530 del procedimiento en cita

Asimismo que, siendo la fecha y hora señaladas, compareció, ante las oficinas que ocupa la Visitaduría General y de Asuntos Internos, diligencia en la que se le hizo del conocimiento la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conociera los hechos que se le imputan, haciéndole entrega de las copias certificadas del expediente formado para tal efecto y se le concedieron diez días hábiles para que formulara la contestación y ofreciera las pruebas que derecho convinieran, siendo así, que por acuerdo de fecha tres de junio de dos mil veinticinco, se le tuvo por presentado en tiempo y forma su escrito de contestación; desahogándose el procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 de la **LSSPEM**, para que en posterior fecha el nueve de julio de dos mil veinticinco, se emitiera la propuesta de sanción por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría General y de Asuntos Internos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, de la **LOFISCALIAEM**, concluyendo con la emisión de la resolución dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en fecha once de agosto de esa anualidad, quienes con base en las atribuciones previstas por los artículos 115, 117, 118 y 119, de la **LOFISCALIAEM**, y 112, de su Reglamento, determinaron modificar la propuesta de sanción, imponiéndole la suspensión temporal de sus funciones, sin goce sueldo por treinta días, ello al haberse encontrado acreditada la responsabilidad administrativa de la inconforme.

Por cuanto a la TERCERA RAZÓN DE IMPUGNACIÓN resulta infundada para declarar la nulidad del acto impugnado, ello es así en razón de que en primer término, la actora no señaló de forma clara y precisa, cuáles de sus puntos planteados, como medios de defensa y son los que considera que no se valoraron y/o analizaron al momento de resolver en definitiva el expediente [REDACTED] y el motivo por el cual lo estima así.

Adiciona que, en segundo término, contrario a ello, como se advierte de la resolución definitiva emitida dentro del procedimiento en cita, por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, fueron analizadas sus argumentaciones en vía de defensa, en relación con el medio de prueba que fue ofrecido y admitido en el desahogo del procedimiento, consistente en copias cotejadas de la carpeta de investigación [REDACTED] teniendo al respecto que en el procedimiento [REDACTED] sus argumentos resultaron infundados para desvirtuar su responsabilidad administrativa, en razón de que, si bien ofrece como medio de prueba para acreditar sus argumentos copias cotejadas de la carpeta de investigación [REDACTED], a fin de establecer que ha cumplido con su función justificando que debido a que la víctima no había podido ser localizada es que no se había continuado con la investigación, lo que denotaba una falta de interés de la víctima.

Argumento señalado por la hoy actora, que se analizó y resultó infundado, en razón que de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 202 BIS, tercer párrafo, del *Código Penal para el Estado de Morelos*, el delito de Violencia Familiar se perseguirá de oficio, por tanto el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos desde el momento en que tiene conocimiento de su existencia, siendo que la obligación de la aquí demandante en su desempeño como Agente del Ministerio Público, en términos de lo que disponen los artículos 131, fracciones III, V y VI, 212, 213, del *Código Nacional de Procedimientos Penales* conducir la investigación, teniendo para ello la facultad de auxiliarse de la Agencia de Investigación Criminal, para la localización de la víctima y de los Servicios Periciales, para la práctica de los actos de investigación que requieren un conocimiento técnico-científico.

Destacando que existen principios y derechos que como Agente del Ministerio Público, se encontraba obligada a observar y salvaguardar, es decir, en el caso específico de la carpeta de investigación [REDACTED] se tiene que se trataba de dos víctimas de violencia familiar, una persona de sexo femenino y el infante identificado con las Iniciales **Y.G.S.B.** de dos años de edad, en razón de ello, se actualizaba la obligación por parte de Ministerio Público de implementar los protocolos necesarios y suficientes a efecto de desarrollar las medidas que permitieran desarrollar la investigación bajo una perspectiva de género al tratarse de un delito de violencia en contra de una mujer y, además en donde también se debía tutelar la esfera jurídica de derechos de un niño, bajo el principio del interés superior del este.

Máxime que asegura, se trata de un delito cuya naturaleza generalmente es de materialización privada y/o que se desarrolla preponderantemente dentro de la dinámica de la intimidad familiar, por lo que la Ministerio Público en cuestión debió considerar esa realidad, así como las condiciones y circunstancias de la víctima y atender su obligación de conducir la investigación bajo los lineamientos de Perspectiva de Género y además en observancia al Interés Superior del Menor, bajo su triple dimensión.

Sigue indicando que, por esas consideraciones era por las cuales al pretender justificar su conducta omisiva planteando que, de las constancias de las llamadas telefónicas se desprende que no fue posible localizar a la víctima y que por ello no se había podido continuar con la investigación, resultó infundado; siendo que goza de facultades para realizar la citación de las víctimas de forma oficial, máxime que las constancias que integran la diversa la carpeta de investigación [REDACTED] se advierte que obran informes policiales, de los que se desprende que la víctima fue localizada en su domicilio. Bajo este contexto, sigue narrando, se advirtió y evidenció que a la víctima le fueron practicados dictámenes médicos y psicológicos, resultando por ende incongruente que únicamente tratándose de actos de investigación relacionados con la carpeta [REDACTED] la víctima no pudiera ser localizable.

Así mismo, determina que por cuanto a su argumento hecho valer en la contestación al procedimiento



██████████ en donde en esencia señala que dentro de la carpeta se encuentra pendiente girar oficio dirigido a la perito en materia de psicología, para el efecto de que se sirva mediante las técnicas, pruebas y procedimientos respectivos determinar el daño moral y/o psicológico, que pudiera presentar el niño de iniciales **Y.G.S.B.**, de dos años de edad, representado por su señora madre, víctima de violencia y ella misma comparezca y exhiba el acta de nacimiento de su hijo, para acreditar su vínculo familiar y/o parentesco.

De esta manera diserta que, el Consejo de Honor y Justicia determinó que por cuanto a estas investigaciones, la demandada estuvo en posibilidad de ordenarlas desde el inicio de la investigación, dado que desde la declaración inicial de la víctima se desprende que también fue agredido su hijo de dos años de edad, es decir que ya contaba con datos que permitían establecer la existencia de una segunda víctima; teniendo que su omisión causó un retraso en la procuración de justicia, denotando una falta de eficacia y profesionalismo; dado que su función de conducir la investigación consiste en que una vez que tiene conocimiento de los hechos, debe abocarse de forma inmediata a realizar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito. Así mismo, al advertir que, si existían afectaciones en la tutela de derechos de un menor de edad, derivado de los hechos que tuvo conocimiento directo y que dieron origen a la carpeta ██████████, su deber era el de actuar con la debida diligencia a fin de proteger el interés superior del niño, su principio de supervivencia y desarrollo previsto en el artículo 6, de la Convención sobre los

Derechos del Niño, ello en atención a que el artículo 3, inciso E, de la *Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*, establece la protección del derecho de la niñez a una vida libre de violencia, en ese sentido le impone el deber al Agente del Ministerio Público de asegurarle al infante ese derecho y un desarrollo pleno e integral.

Establece que, por cuanto al diverso argumento establecido en el procedimiento de cuya resolución se duele, en el sentido de que en la causa penal [REDACTED], derivada de la carpeta de investigación [REDACTED] se obtuvo la prisión preventiva justificada, vinculándose a proceso al imputado en fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, y actualmente se encuentra en prisión en el interior del Centro de Reinserción Social, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, y la etapa procesal de la carpeta de investigación y causa penal es en cierre de investigación, la cual feneció en fecha dieciséis de junio de dos mil veinticinco; el Consejo de Honor y Justicia, tuvo a bien determinar que dicho argumento de defensa resultaba insuficiente para desestimar el procedimiento iniciado en su contra, dado que la diversa carpeta de investigación [REDACTED] deriva de una segunda agresión que la otra víctima sufrió por parte del imputado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco; es decir, aproximadamente dos meses y medio posterior a la primer denuncia presentada por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Así mismo, apunta que si bien a la audiencia inicial acudió la aquí actora, lo cierto es que la investigación fue realizada por diversa Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, quien solicitó orden de aprehensión en contra del agresor; investigación que contrario a la seguida bajo la carpeta de investigación [REDACTED] por la actora en este juicio, fue realizada de forma inmediata y eficaz, logrando así que se concediera el mandato judicial por el cual se logró sujetar a proceso penal al imputado, respecto de los hechos que acontecieron el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, siendo que por los hechos que sucedieron en fecha ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, y por los cuales se inició la carpeta [REDACTED] de la que derivan las omisiones que se le atribuyen a la sujeta a procedimiento ahora actora, aún no se ha ejercitado acción penal; en otras palabras, el hecho que dentro de la carpeta de investigación [REDACTED] seguida por los delitos de amenazas y allanamiento de morada, se logrará sujetar a proceso penal al mismo agresor, no subsana las omisiones en que incurrió la actora en este juicio, dentro de la carpeta de investigación [REDACTED], seguida por el delito de violencia familiar. Análisis que fue realizado en el apartado "6.- EXCEPCIONES Y DEFENSAS" del **acto impugnado** emitida en fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos en el procedimiento [REDACTED] y que se acredita con las copias certificadas del procedimiento antes citado, mismas que se exhiben y anexan al presente escrito de contestación, de

las cuales se advierte lo antes precisado, específicamente de foja 824 a foja 829.

7.5 Análisis de la contienda

Ahora bien, tocante a las manifestaciones que realizó la **parte actora**, en los puntos **primero** y **segundo**, se aprecia que las mismas son expresiones generales que si bien son teórica y jurídicamente ciertas, no están investidas de un razonamiento lógico jurídico encaminado a poner en evidencia la ilegalidad del **acto impugnado**, pues no basta que en una razón de impugnación se traigan a colación diversos artículos, preceptos constitucionales y pronunciamientos jurisprudenciales para poder obtener la nulidad de acto de autoridad que se combate; sino que resulta legal e indispensable que en acompañamiento de toda esa gama de normas estén vinculadas con el acto que se ataca, dando a conocer en que parte del mismo se vulneraron esas garantías, derechos humanos, pronunciamientos de la Corte o preceptos legales.

De otra manera **resultan inoperantes para declarar la nulidad** que se busca, pues como se antepuso no señala ni concretizar un razonamiento directo que pusiera en evidencia la ilegalidad de los fundamentos, razones decisorias o argumentos del acto que se controvierte en el juicio en cuestión, y que tuviesen como fin justificar su pretensión.

Luego entonces, se denota que las razones efectuadas por la parte actora, están enfocadas en señalar que ella si

cumplió con sus obligaciones en la integración de la carpeta de investigación; sin embargo, no controvierte los fundamentos y motivos en que se encuentra sustentada la resolución de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] materia de impugnación, pues es de explorado derecho que, cuando el recurrente en las razones por las que impugna el acto reclamado, alega meras apreciaciones subjetivas y no controvierte los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución sujeta a escrutinio, las referidas alegaciones, no pueden tomarse en consideración y resultan inoperantes para anular la resolución recurrida, por ende, lo que de manera natural procede, es su confirmación.

Sirven de sustento las tesis jurisprudenciales que se plasman a continuación:

AGRAVIOS INOPERANTES.²⁴

Si en las manifestaciones expresadas a manera de **agravios no se precisa en que consistió la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se combaten los fundamentos legales** y consideraciones en que se sustentó el fallo, es de concluir que **tales manifestaciones, no ponen de relieve la supuesta falta cometida** por el Juez de Distrito.

En el juicio que se resuelve, en los puntos que se analizan, la **parte actora** dejó de expresar en su escrito de demanda las razones o agravios que estimó pertinentes contra el acto reclamado, es decir debió controvertir las razones y fundamentos jurídicos en que se apoya y sostiene la resolución impugnada, lo que no aconteció, pues no se combatieron las consideraciones que sostuvo la autoridad responsable en la

²⁴ Registro digital: 220948, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época. Materia(s): Común, Tesis: V.2o. J/14, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 96, Tipo: Jurisprudencia.

resolución controvertida, lo que genera que permanezcan incólumes, rigiendo en sus términos el sentido del fallo reclamado, sin que se produzca la declaración de nulidad del acto impugnado.

En esa misma línea de estudio y tocante al concepto de impugnación con ordinal **tercero** hecho valer por la accionante aludiendo sustancialmente que, la autoridad demandada al momento de emitir la resolución impugnada se limitó a declarar lo manifestado en el considerando 7.1, sin valorar ni analizar los puntos que planteó al momento de dar contestación a los hechos que se le atribuyen, ni hace pronunciamiento alguno sobre las pruebas ofrecidas dentro del procedimiento administrativo seguido en su contra, como lo es el análisis de la carpeta de las copias cotejadas de la investigación [REDACTED], ya que con ella se acreditan sus defensas y excepciones hechas valer en el procedimiento de origen, incumpliendo con las garantías de debido proceso, al no realizar un análisis exhaustivo de los puntos que integraron la litis y considera que, en el acto impugnado no se cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, al no atender los motivos que hizo valer al dar contestación al procedimiento administrativo, ya que al resolver el fondo del mismo debió hacerlo sin omitir nada, lo que denota su ilegalidad.

Se considera **infundado** lo referido por la actora; porque de la lectura integral del acto impugnado, se aprecia se encuentra compuesto de diversos capítulos y subcapítulos.

Es así que al analizar los apartados con numerales 6 y 7.1 del **acto impugnado**, se aprecia que en el primero de ellos denominado: "EXCEPCIONES Y DEFENSAS", se plantearon las manifestaciones que hizo valer la demandante en su defensa, para con posterioridad en ese mismo capítulo, la demandada vertiera su análisis al siguiente tenor:

"... Argumentos que resultan infundados en razón a que, si bien ofrece como medio de prueba para acreditar sus argumentos copias cotejadas de la carpeta de investigación [REDACTED] a fin de establecer que ha cumplido con su función y debido a que la víctima no ha podido ser localizada es que no se ha continuado con la investigación, lo que denota una falta de interés de la víctima; en ese sentido es importante precisar en que el artículo 202 BIS tercer párrafo del Código Penal para el Estado de Morelos, establece que el delito de Violencia Familiar se perseguirá de oficio, por tanto el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos desde el momento en que tiene conocimiento de su existencia, de ahí que los argumentos vertidos por la servidora pública respecto a la falta de interés de la víctima, resultan infundados, siendo que su obligación como Agente del Ministerio Público, en término de lo que disponen los artículos 131, fracciones III, V y VI, 212, 213, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es conducir la investigación, teniendo para ello la facultad de auxiliarse de la Agencia de Investigación Criminal, para la localización de la víctima y de los servicios Periciales para la práctica de los actos de investigación que requieren un conocimiento técnico-científico; máxime que existen principios y derechos que como [REDACTED] se encuentra obligada a observar y salvaguardar, es decir en el caso específico de la carpeta de investigación [REDACTED] se tiene que se trata de dos víctimas de violencia familiar, una persona de sexo femenino y el menor de iniciales Y. G. S. B. de dos años de edad, por tanto subsiste la obligación por parte de Ministerio Público de actuar con perspectiva de género al tratarse de un delito de violencia contra las mujeres y contra un menor de edad, máxime que se trata de un delito cuya naturaleza de realización es a vista de pocos, por lo que la Ministerio Público debe considerar esa realidad, así como las condiciones y circunstancias de la víctima y conducir la investigación conforme a la perspectiva de género y atendiendo al interés superior del menor; consideraciones por las cuales el hecho que pretenda establecer y justificar su conducta omisiva al plantear que de las constancias de las llamadas telefónicas se desprende que no fue posible localizar a la víctima y que por ello no se ha podido continuar con la investigación, resulta infundado; siendo que goza de facultad para realizar la citación de las víctimas de forma oficial, máxime que las constancias que integran la diversa carpeta de investigación [REDACTED] se advierte que obran informes policiales, de los que se desprende que la víctima fue localizada en su domicilio, así mismo le fueron practicados dictámenes médicos y psicológicos; resultando por ende incongruente que únicamente

tratándose de actos de investigación relacionados con la carpeta [REDACTED], la víctima no pudiera ser localizable.

Ahora bien, bien. respecto a que dentro de la carpeta se encuentra pendiente girar oficio dirigido a la perito en materia de psicología, para el efecto de se sirva mediante las técnicas, pruebas y procedimientos respectivos determinar el daño-moral y/o psicológico, que pudiera presentar el menor de iniciales Y.G.S.B. de 2 años de edad, representado por su señora madre NICOLE SOLIS BOSQUES, víctima de violencia y que la víctima comparezca y exhiba el acta de nacimiento de su menor hijo de iniciales Y.G.S.B de 2 años de edad, para acreditar el lazo familiar con el menor. Al respecto se tiene que estas investigaciones, estuvo en posibilidad de ordenarlas desde el inicio de la investigación, dado que de la declaración inicial de la víctima se desprende que también fue agredido el menor de 2 años de edad, mismo que manifestó era su hijo, es decir que ya contaba con datos que permitían establecer la existencia de una segunda víctima, teniendo que su omisión causa un retraso en la procuración de justicia, denotando una falta de eficacia y profesionalismo; dado que su función de conducir la investigación consiste en que una vez que tiene conocimiento de los hechos, debe abocarse de forma inmediata a realizar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito. Así mismo al advertirse que se encontraba afectado un menor de edad derivado de los hechos que dieron origen a la carpeta [REDACTED] su deber es actuar con la debida diligencia a fin de proteger el interés superior del menor, ello en atención a que el artículo 3 inciso E de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la protección del derecho de la niñez a una vida libre de violencia, en ese sentido le impone el deber al Agente del Ministerio Público de asegurarle al infante ese derecho y un desarrollo pleno e integral; por tanto era prioritario ordenar desde el inicio de la investigación las diligencias relacionadas con la menor victimar Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

CUANDO LA VIOLENCIA INVOLUCRE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES OF ORDENAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS UN GRUPO VULNERABLE O EXISTA DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GENERO.

Hechos: Una mujer demandó a su excónyuge la responsabilidad civil derivada por el daño moral que ocasionó la violencia económica, patrimonial y psicológica que ejerció en contra de ella y de sus dos hijos menores de edad. Al resolver el amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo a los menores para que se les realizara la prueba pericial en psicología para acreditar el daño, pero negó el amparo a la madre, ya que consideró que no existía un daño derivado de la violencia económica y patrimonial, ni había pruebas que demostraran la supuesta violencia psicológica, derivado de lo anterior interpuso recurso de revisión.

*Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina **que es deber de las personas juzgadoras recabar y ordenar las pruebas pertinentes para esclarecer los hechos en casos de violencia familiar en donde se involucren los derechos de personas pertenecientes a un grupo vulnerable o exista desigualdad por razón de género.***



*Justificación. El derecho humano de acceso a la justicia en igualdad de condiciones y bajo un método con perspectiva de género deriva de los artículos **1º. y 4º., párrafo primero, de la Constitución General**. En ese sentido, esta Primera Sala ha precisado que en las contiendas de violencia familiar donde una de las partes se encuentre en estado de debilidad frente a su presunto agresor, la personal juzgadora debe remediar la desigualdad de las partes de manera oficiosa. Lo anterior tiene la finalidad de visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad y discriminación por razón de género en los casos en los que la violencia familiar es provocada por alguna conducta basada en estereotipos de género. De esta forma se garantiza el acceso a la justicia con igualdad de condiciones a todas las personas.*

Por último, respecto a que, en la causa penal [REDACTED] derivada de la carpeta de investigación [REDACTED] se obtuvo la prisión preventiva justificada, vinculándose a proceso al imputado en fecha 16 de mayo de 2025, y actualmente el mismo, se encuentra en prisión en el interior del Centro de Reinserción Social, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos y la etapa procesal de la carpeta de investigación y causa penal es en cierre de investigación, la cual fenece en fecha 16 de junio de 2025, ello no resulta suficiente para desestimar el procedimiento iniciado en su contra, dado que se tiene que la carpeta de investigación [REDACTED] deriva de una segunda agresión que la víctima sufrió por parte del imputado en fecha 24 de febrero de 2025, es decir, aproximadamente dos meses y medio posterior a la primer denuncia presentada por la [REDACTED] así mismo se tiene que si bien a la audiencia inicial acude la [REDACTED] la investigación fue realizada por diversa Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Femicidio, la cual solicitó orden de aprehensión en contra de [REDACTED] investigación que contrario a la seguida bajo la carpeta de investigación [REDACTED] fue realizada de forma inmediata y eficaz, logrando así que se concediera el mandato judicial por el cual se logró sujetar a proceso penal al imputado, respecto de los hechos que acontecieron el 24 de febrero de 2025, siendo que por los hechos que sucedieron en fecha 08 de noviembre de 2025 y por los cuales se inició la investigación [REDACTED] seguida por los delitos de amenazas y allanamiento de morada, se logrará sujetar a proceso penal al [REDACTED] no subsana las omisiones en que incurrió la Licenciada Aracely Barragán Bello, dentro de la carpeta de investigación [REDACTED] seguida por el delito de violencia familiar. (Sic)

En suma de lo anterior, como se antepuso en el subcapítulo 7.1 del **acto impugnado** se estableció:

“...

7.1 ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

SEGUNDO.- Atento a lo anterior y toda vez que los argumentos vertidos por la servidora pública no desvirtúan su responsabilidad administrativa, se procede a realizar un estudio integral de los autos

que conforman el procedimiento administrativo que nos ocupa, a fin de determinar el sentido correcto de la responsabilidad administrativa que le es atribuida a la servidora pública; teniendo que en autos obra:

1. Oficio número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] signado por el C. DANIEL MARTÍNEZ ESTRADA, en su carácter de Directo General de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración, por el que informa que la servidora pública [REDACTED] cuenta con el cargo de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] estatus activa, y actualmente adscrita a la Fiscalía Especializada en Representación de Grupos Vulnerables y Asistencia Social.

2. Oficio número [REDACTED] de fecha [REDACTED]
[REDACTED] signado por la MTRA. SARA OLIVIA PARRA
TÉLLEZ, en su carácter de Directora General del Centro de Justicia
para las Mujeres del Estado de Morelos, informando: "la servidora
pública [REDACTED]

Lugar de Adscripción: Centro de Justicia para las Mujeres. Funciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y el Manual de organización del Centro de Justicia para las Mujeres son las siguientes: Recibir denuncias y querellas e integrar la carpeta de investigación correspondiente conforme a la normativa aplicable. Dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos presuntamente constitutivos del delito de fuero común. Recabar por conducto de la Policía de Investigación Criminal los antecedentes, datos, evidencias y elementos de convicción tendientes a establecer la comisión de un hecho delictivo y que presuman que el imputado lo cometió o participo en su comisión ejercer la acción penal en la forma establecida por la normativa aplicable. Adoptar o, en su caso, ordenar las medidas necesarias para la protección, atención y auxilio de las víctimas, ofendidos y testigos, conforme a la normativa aplicable; Aplicar las medidas de protección conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable; Promover la aplicación de formas anticipadas de terminación del proceso, mecanismos de aceleración o salidas alternas; Determinar el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigación o el archivo temporal de la investigación, Solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; Solicitar a la autoridad judicial, la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan. Interponer los recursos que procedentes e intervenir en cuanto corresponda para que la administración de justicia sea pronta y expedita. Judicialización de carpetas de investigación. Desahogo de audiencias ante el Juez de Control de ratificación de medidas de protección audiencias de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso imposición de medidas cautelares en carpetas con detenido que ameriten prisión preventiva. Realizar judicialización de carpetas sin detenido y continuar con todas las etapas procesales ante el Órgano Jurisdiccional, investigación complementaria, salidas alternas, etapa intermedia, juicio oral y ejecución de sanciones entre otras que se deriven del proceso judicial. Brindar Asesoría Jurídica a las Víctimas con relación a sus procesos penales y realizar la canalización correspondiente, para Juicios en Materia Familiar Así como las mencionadas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y artículo 9 de



su Reglamento. HORARIO: 08:00 a 17:00 horas. (Cubre guardias los fines de semana y días festivos que por rol de guardias le corresponde en el Centro de Justicia para las Mujeres sede Cuernavaca) ...".

3. Oficio número [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] signado por la MTRA. SARA OLIVIA PARRA TELLEZ, en su carácter de Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos, a través del cual en esencia informa lo siguiente: "...en atención al oficio [REDACTED] [REDACTED] relacionado al expediente [REDACTED], informo a usted lo siguiente: 1. La [REDACTED] es la [REDACTED] [REDACTED] encargada actualmente del seguimiento y perfeccionamiento legal de la carpeta de investigación [REDACTED]; se adjunta copia cotejada del libro de gobierno que acredita lo dicho..."

4. Oficio sin número, de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, firmado por la [REDACTED], en su carácter de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a través del cual remite copias cotejadas de la carpeta de investigación [REDACTED] por el delito de Violencia Familiar en agravio de la [REDACTED] y contra del [REDACTED] [REDACTED]

5. Diligencia de la transcripción de la audiencia solicitada por la Agente del Ministerio Público LICENCIADA REYNA ITALIA RIVERA CESARIO, programada dentro de la causa penal número [REDACTED] de fecha [REDACTED], la cual en la parte que interesa, se hace consistir en lo siguiente: "...se procede a realizar la transcripción **del DVD-R, MARCA VERBATIM, COLOR PLATEADO, DE 4.7 GB.** Procediendo el suscrito a introducir el disco DVD-R, **MARCA VERBATIM, COLOR PLATEADO, DE 4.7 GB,** mismo que contiene un archivo digital denominada [REDACTED] mismo que corresponde a la audiencia dentro de **la causa penal** [REDACTED] de fecha [REDACTED] se observa al inicio del video, seis recuadros: Primero: **JUEZ:** Se encuentra una persona del sexo masculino, siendo el **LIC. NATANAEL SUBDÍAS AGUILAR,** Juez especializado en control. Segundo: **FISCAL:** Se encuentra una persona Siendo la **LIC. REINATALIA RIVERA CESÁREA,** Agente del Ministerio Público. ... (Sic)

Documentales que al no haber sido objetadas ni impugnadas por la servidora pública, y toda vez que son documentos públicos, revisten pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 490 y 491, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo tanto, son valorados de forma plena y en consecuencia tienen eficacia para acreditar que [REDACTED] en su carácter de [REDACTED] se encuentra adscrita a la [REDACTED].

[REDACTED] teniendo bajo su cargo el seguimiento y perfeccionamiento legal de la carpeta de investigación [REDACTED] siendo la responsable de realizar todas y cada de las diligencias que sean necesarias pertinentes y útiles para el debido esclarecimiento del hecho delictivo; así mismo se acredita del estudio técnico jurídico a las constancias que integran la indagatoria número [REDACTED]

iniciada en fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, instruida por la posible comisión de delito de Violencia Familiar y Lesiones, en agravio de [REDACTED] y en agravio de su menor hijo de identidad reservada de iniciales Y.G.S.B y en contra del [REDACTED] que la M.D. LUCERO MARGARITA CUIEL GONZÁLEZ, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres Fiscalía General del Estado de Morelos, atendiendo a su cargo, da inicio a la indagatoria, realizando diversos actos de investigación tendientes esclarecer los hechos denunciados; teniendo que una vez que fue recibida la indagatoria [REDACTED] por la [REDACTED],

para su continuación e integración de la misma, realiza hasta fecha cinco de febrero de dos mil veinticuatro, una constancia en la que asienta lo siguiente: "... FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CENTRO JUSTICIA PARA MUJERES, CARPETA DE INVESTIGACIÓN: [REDACTED] CONSTANCIA.-En la ciudad de Cuernavaca Morelos, siendo las 10:30 horas del día 05 de febrero del 2024, la [REDACTED]

[REDACTED] HACE CONSTAR ----- Se hace constar que el día y la hora señalados se realizó llamada telefónica al número [REDACTED] mismo que se encuentra dentro de las constancias que integran la carpeta de investigación que al rubro se cita y fue proporcionado por la [REDACTED], lo anterior con la finalidad de localizarla en virtud de que se recibió informe de inasistencia a su evaluación psicológica, sin embargo al momento de marcar dicho número una grabación de voz refiere BUZON DE VOZ. Lo que se asienta para constancia legal. CONSTE-

[REDACTED] SIC. Posteriormente, y como se puede observar de las constancias que integran la carpeta de investigación, la servidora pública [REDACTED] realiza una nueva diligencia ministerial en fecha veinticuatro del mes de febrero de dos mil veinticinco, girando oficio a la C. Perito en materia de Psicología adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, solicitando se sirva determinar daño moral y/o psicológico que presenta [REDACTED] quien presentó denuncia". SIC.; y, por último, como se puede advertir de las constancias de la carpeta de investigación en mención, la [REDACTED],

[REDACTED] agrega a la carpeta de investigación citada, la documental consistente en el número de folio: [REDACTED], de fecha [REDACTED] la que se hace consistir en lo siguiente "...NÚMERO DE CARPETA: [REDACTED]. FOLIO: [REDACTED].

Cuernavaca Morelos a 07 de Abril de 2025. ASUNTO: TARJETA INFORMATIVA. [REDACTED]

[REDACTED] PRESENTE. Por medio del presente y en referencia a su oficio de fecha 24 de Febrero de 2025, recibido la que suscribe, el cual está relacionado con la Carpeta de Investigación al rubro indicado, le informo que, en atención a su petición para determinar DAÑO MORAL Y/O PSICOLOGICO a la [REDACTED]

la fecha en la cual se llevara a cabo la evaluación psicológica es la siguiente: Lunes 14 de Abril a las 10:00 horas. Esta fecha con la finalidad de atender a la víctima antes mencionada y realizar pruebas proyectivas y la entrevista correspondiente para elaborar el dictamen que se está solicitando, cabe mencionar que la C. [REDACTED] ya fue notificada para que se presente a realizar la evaluación requerida. Lo anterior lo informo para los fines legales conducentes...". SIC. Con lo que se establece que la servidora pública [REDACTED] no ordeno ni practicó diligencias eficaces que llevaran al esclarecimiento de los hechos denunciados, y con los que se establecieran nuevas líneas de investigación que llevaran a contar con elementos probatorios suficientes para determinar, o no el ejercicio de la acción penal, por el delito de violencia familiar en agravio de la víctima y de su menor hijo. Lo que llevó al Juez de la Causa [REDACTED] en audiencia celebrada el [REDACTED] establecer que es inadmisibile que el imputado siguiera en libertad, cuando seguía amenazando a la víctima, cuando en estos delitos se debe actuar con perspectiva de género, tal como se advierte de la transcripción de la referida audiencia.

En ese sentido se tiene que [REDACTED] en su carácter de [REDACTED] no cumplió con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 9, fracciones I y IV de Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; que disponen:

..." (Sic)

De ahí, que contrario a los aducido por la demandante, se hizo el estudio respectivo de la defensa que hizo valer.

Sin que de los agravios que profiere se desprenda, la emisión de un razonamiento que ataque las manifestaciones antes detalladas. Lo expuesto se traduce en que, en el presente juicio de nulidad, lo no controvertido de la resolución impugnada conlleva implícito el consentimiento de la **parte actora** al haber operado la preclusión, pues el objeto se limita a la resolución emitida en la resolución de fecha **once de agosto de dos mil veinticinco**, que en el caso que nos ocupa, es evidente que aún y cuando la razón de impugnación si la encaminó al **acto impugnado** resulta carente de sustento, por

lo que naturalmente resultan infundadas para lograr la nulidad que busca.

Se apoya lo anterior en el siguiente criterio:

AGRAVIOS INOPERANTES.²⁵

Resultan **inoperantes los agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida**, ni se pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo.

(El énfasis es propio)

Así tenemos que, en el presente caso los agravios formulados por la accionante resultaron inoperantes e infundados para desvirtuar lo resuelto por la autoridad que demandó; en esa tesitura, se arriba a la conclusión que es **improcedente** decretar la nulidad del **acto impugnado** y por el contrario **se confirma la legalidad** de la resolución de fecha [REDACTED] emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa número [REDACTED] por el **H. Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos**.

7.6 Del registro del resultado del presente fallo

²⁵ Registro digital: 180410, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: XI.2o. J127, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 1932, Tipo: Jurisprudencia

El artículo 182 segundo párrafo²⁶ de la **LSSPEM**²⁷ señala que la autoridad que conozca de cualquier auto de vinculación a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, notificará inmediatamente al Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública, quien a su vez lo notificará al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.

En esa tesitura, dese a conocer el resultado del presente fallo al Centro Estatal antes citado para el registro correspondiente, por así ordenarlo el precepto legal de referencia

8. DE LAS PRETENSIONES

Al ser **inoperantes las razones** y haberse confirmado la legalidad de acto impugnado, resulta **improcedente la pretensión** reclamada en esta vía por la demandante, consistentes en:

²⁶ Artículo 182. El Centro Estatal tendrá a su cargo la inscripción y actualización de las personas que integran de las Instituciones de Seguridad Pública en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley General. Cuando a las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, o auxiliares de la seguridad pública se les dicte cualquier auto de vinculación a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del Secretariado Ejecutivo.

²⁷ Misma que entró en vigor el 01 de enero de dos mil veintiséis, de conformidad al artículo segundo transitorio, publicada el 31 de diciembre de 2025, en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6510 Alcance.

Se declare la nulidad lisa y llana emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos dentro del expediente [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

9. EFECTOS DEL FALLO

Las razones de impugnación hechas valer por la actora, resultaron **inoperantes e infundadas**; por ende, lo procedente es **confirmar la legalidad** del acto impugnado consistente en la resolución de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitida por el **H. Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos**, en el expediente procedimiento administrativo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mediante el cual se sancionó a la actora con la **suspensión temporal de sus funciones, sin goce de sueldo por treinta días**.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II sub inciso I) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** 1, 2 y 3, 85 y 86 de la **LJUSTICIAADMVAEMO**; es de resolverse y se resuelve al tenor de los siguientes:

10. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este **Tribunal** en Pleno es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados

en el capítulo número 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. Las razones de impugnación hechas valer por la actora, resultaron **inoperantes e infundadas**.

TERCERO. Se confirma la legalidad del acto impugnado consistente en la resolución de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitida por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el expediente procedimiento administrativo [REDACTED]

CUARTO. Resulta improcedente la pretensión de la actora.

QUINTO. Gírese el oficio correspondiente para los efectos del apartado 7.6. de esta sentencia.

SEXTA. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

11. NOTIFICACIONES

NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE
CORRESPONDA.

12. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción;

Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrada **VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y ponente en el presente asunto; Magistrada **KARLA SOCORRO REYES REYES**, Titular de la Sexta Sala de Instrucción y Magistrada **CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**, Titular de la Séptima Sala de Instrucción; ante **SANTA NANKIN MÁRQUEZ MARTÍNEZ**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**

MAGISTRADO PRESIDENTE



GUILLERMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA



MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO

TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/JDN-213/2025

MAGISTRADA

VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

MANUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADO

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADA

KARLA SOCORRO REYES REYES
TITULAR DE LA SEXTA SALA DE INSTRUCCIÓN

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

MAGISTRADA



CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR

TITULAR DE LA SÉPTIMA SALA DE INSTRUCCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS



SANTA NANKIN MÁRQUEZ MARTÍNEZ

Santa Nankin Márquez Martínez, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, da fe que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el expediente número TJA/5ªSERA/JDN-213/2025 promovido por [REDACTED] contra actos del **CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS**; misma que es aprobada en Pleno de fecha ocho de julio de dos mil veintiséis. **CONSTE.**


AMRC

“En términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones IX y X y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracción XXI, 68 fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3 fracciones XXV y XXVII, 49 fracción VI, 84, y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.